



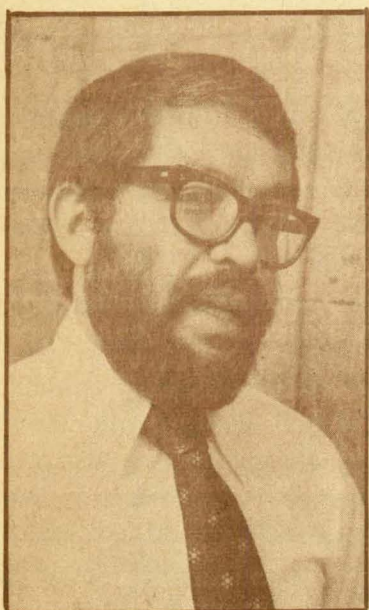
General Carlos Humberto Romero, presidente de El Salvador, viene a México.

VISITANTE INDESEABLE: ROMERO, EL SOMOZA DE EL SALVADOR, EN MÉXICO

¿Podemos decir que es

Bienvenido?

POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA



¿Verdad que sería por completo reproducible invitar en estos días al sha de Irán o al propietario de Nicaragua, Anastasio Somoza, para que hicieran una visita oficial a México? Son tan evidentes sus crímenes, tan conocido el despotismo con que gobiernan, tan feroz la represión que practican, que su estancia en nuestro país, ahora, resultaría ofensiva.

Y sin embargo, en un grave traspiés de nuestra cancillería, dentro de una semana estará aquí el general Carlos Humberto Romero, que sólo es menor que Pahlevi o Somoza en la medida que la República de El Salvador, de la que Romero es presidente, es más pequeña que Irán o Nicaragua y en tanto que su vesania ha recibido atención menos

intensa y sostenida.

El Salvador es una nación empobrecida por una típica explotación oligárquica y colonial. Para tomar sólo un indicador, el ingreso per capita, este pequeño país centroamericano casi gana el campeonato de los que lo tienen más reducido: con 450 dólares al año por cabeza —que es la tercera parte del ingreso en México, donde estamos como estamos—, El Salvador sólo es superado por Bolivia, Haití y Honduras, el país vecino con que fue echado a pelear en 1969.

Desde hace casi 50 años, con algunas breves interrupciones, El Salvador ha estado regido por militares. Desde 1962, aunque se han efectuado elecciones formalmente libres, todos los presidentes han sido miembros de las fuerzas armadas. El actual presidente, nuestro ilustre próximo visitante, el general Romero, fue elegido en febrero de 1977 como candidato del Partido de Conciliación Nacional, que es el partido de los militares y que casi por completo ha desplazado a las agrupaciones independientes.

El 2 de diciembre del año pasado, 40 diarios en todo el mundo publicaron una proclama de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional salvadoreña, con cargo a la empresa Phillips, cuyo gerente en El Salvador fue secuestrado por las FARN. En México, correspondió hacerlo a "El Universal", que en dos páginas presentó la posición de la guerrilla salvadoreña. Allí se denuncia que desde 1972, la guardia nacional ha asesinado a 4800 civiles, ha hecho desaparecer a más de 100 personas y mantiene prisioneros a 300 salvadoreños, bajo la "ley de defensa y garantía del orden público" que sólo ha estado en vigor 6 meses, en una situación que las FARN interpretan como "un estado de sitio no declarado".

Por su parte, el comité por la liberación de los presos políticos de El Salvador hizo público, en Panamá, el recuento de los actos de represión ejercidos desde 1977 por el gobierno del general Romero: 1,050 presos políticos, 110 personas desaparecidas y más de 50 asesinatos. Informaron que en marzo de 1977, apenas un mes después de que fuera elegido Romero, miembros de la Guardia Nacional atacaron con tanques y aviones la localidad de San Pedro Perulepan, al norte de la capital, donde además de la destrucción material detuvieron a decenas de personas cuyo paradero se desconoce todavía hoy. El comité agregó que además de la acción directa del ejército, el gobierno auspicia la actividad represiva de

un grupo paramilitar denominado "Organización Democrática Nacional" (ORDEN), especializada en perseguir obreros y campesinos. A partir de noviembre de 1977, concluyó el comité, la represión se ha incrementado, después de que unas 6 mil personas tomaron el Ministerio del Trabajo en apoyo de los huelguistas de cinco fábricas.

Puede considerarse natural que los opositores internos al régimen salvadoreño hagan denuncias de este género. Cabe, por lo tanto, citar testimonios menos parciales. Tres parlamentarios ingleses estuvieron a principios de diciembre del año pasado en esa república centroamericana, y a su regreso a Londres acusaron al gobierno de El Salvador de violar "salvajemente" los derechos humanos. Lord Chitnts, jefe de la misión, opinó que ese régimen "es la dictadura derechista más extrema que jamás he visto". Y aunque expresiones como ésta, y visitas como ésta han servido, o pueden servir, con propósitos de intervención ilegítima, agregados a otras evidencias contribuyen a hacer patente la crueldad con que gobierna el ejército en El Salvador.

Los parlamentarios ingleses llegaron a tierra salvadoreña no porque el gobierno se sienta capaz de ser examinado a la luz de los parámetros democráticos. La visita de la misión británica fue forzada por el secuestro de dos banqueros ingleses en El Salvador, y responde además a un interés creciente en Inglaterra por la situación que impera en este país centroamericano. El 23 de noviembre anterior, 118 miembros de la Cámara de los Comunes solicitaron al comité del Premio Nobel de la Paz que considere candidato a ese galardón, para 1979, al obispo Óscar Arnulfo Romero, dirigente de la iglesia salvadoreña y uno de los más vigorosos defensores de quienes sufren persecución por parte de las fuerzas armadas gubernamentales.

El general Romero ha acusado frecuentemente a la Iglesia de participar en actos de subversión. El primero de diciembre, al pronunciar un discurso en la Escuela Militar, el presidente de la República afirmó que "la Iglesia apoya a los terroristas sin darse cuenta de que son ellos los que violan los derechos humanos". Pero le resultará difícil convencer a la opinión mundial de que su gobierno es un defensor de tales derechos, cuando se conocen informes como el de Francisco Baltazar Campos, asilado en la embajada de México en El Salvador, quien denunció que los cuerpos de seguridad de este país han asesinado a algunos presos políticos con cargas de dinamita, para que no quede rastro alguno de ellos.

Entre noviembre y diciembre del año pasado, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional secuestraron a 5 personas: Tanaka Susuki, industrial japonés; Fritz Schuitema, ejecutivo holandés de la empresa Phillips; y Ian Massie y Michael Chatterton, los banqueros ingleses; y el doctor Antonio Bonilla, hijo del propietario de la empresa "Teleférico San Jacinto". Con esas capturas, la guerrilla se propone conseguir la libertad de algunos presos políticos, así como difundir la situación que prevalece en su país. El ejecutivo holandés fue liberado el sábado 30 de diciembre, después de lo cual informó que es posible que Susuki sea puesto también en libertad en breve, mientras que la suerte de los banqueros ingleses depende de que se deje libres a cinco presos políticos. Schuitema expresó que durante los 36 días de su cautiverio fue siempre bien tratado.

Estamos lejos de pretender hacer la apología de la guerrilla. Sin embargo no parece haber posibilidad de acción política legal en El Salvador. El 31 de enero de 1978, 120 trabajadores fueron detenidos por declarar una huelga en la central azucarera Izalco. En marzo 9 campesinos fueron muertos por la policía, cuando ésta dispersó una manifestación ante el Banco (Sigue en la página 70)

(Viene de la página 22) Agropecuario, organizada para exigir mejores condiciones en los arrendamientos de tierra. En ese mismo mes otras quince personas murieron a manos de las fuerzas armadas, para sofocar un movimiento organizado por la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y la Unión de Trabajadores del Campo, en la región central del país. El 11 de abril, como protesta por esta campaña represiva, más de doscientos campesinos ocuparon la catedral de San Salvador y las embajadas de Panamá, Venezuela, Costa Rica y Suiza. En junio, también en demanda de libertad para los presos políticos, grupos populares ocuparon las sedes de la ONU y la OEA. En agosto fue detenido el dirigente sindical Pedro López. En septiembre la guerrilla asesinó al expresidente del Congreso Alfonso Rodríguez, ametralló la embajada norteamericana e hizo estallar una bomba en la sede del partido gubernamental, por lo que el ejército fue puesto en estado de alerta. En octubre fue muerto el industrial japonés Fujio Matsumoto, secuestrado por las FARN, según ellas en un enfrentamiento con la policía: el dramaturgo Norman Douglas y el líder sindical Jesús Vinicio Avalos se asilaron, mientras que Alberto Enriquez, dirigente cristiano campesino, fue hecho prisionero. El 7 de noviembre estallaron cuarenta bombas en todo el país, colocadas por la guerrilla y el 13 los activistas ocuparon 18 estaciones de radio para denunciar la represión y la censura. El 8 de noviembre, Amnistía Internacional dijo que el gobierno "violó sistemáticamente el derecho a la vida y a la integridad de la persona". El presidente del país donde todo eso ocurre será nuestro invitado oficial la próxima semana. ¿Podemos, acaso, decirle que es bienvenido?

Hacemos lo contrario de lo que Y Ahí La Vamos

POR ANTONIO VARGAS MACDONALD



15 por ciento de nuevo aumento a las tortillas.

Es fama que en Suecia las señales que rigen el tránsito se fijan a la izquierda de la carretera, mientras la circulación va por la derecha. Algo parecido pasa en México con los dichos y los hechos oficiales: las palabras nos dicen que todo marcha bien, que todas las medidas de gobierno convergen hacia el interés de las mayorías, que se ha dominado la inflación, que hemos salvado victoriosamente la recesión económica; en tanto que actos y realidades indican que lo cierto es más bien todo lo contrario.

La confusión nos llevó el sexenio pasado a límites extremos. Llegamos a creer que cuando se nos anunciaba

una cosa se haría la opuesta. La falta de autenticidad, tradicional en nuestra vida pública, alcanzó niveles máximos hasta dar la impresión de que se gobernaba para un país irreal, imaginario, no para este México tangible y maltrecho, así eran de extrañas las palabras a los hechos que en vano pretendían representar.

Al comenzar este sexenio, tras el "guayabazo" de la devaluación —alabada por el discurso oficial como meritisima y altamente benéfica—, caídos al fondo de una crisis de confianza sentimos que el nuevo gobierno comenzaba a hablar con la verdad, a llamar a las cosas por sus nombres, a tratar a los gobernados con la sinceridad que merecemos, aunque las verdades con frecuencia sean amargas. Pero aún no hemos alcanzado la mitad del periodo constitucional y ya las cosas nuevamente se desbocaron: dicho y hecho vuelven a seguir cursos divergentes cuando no contradictorios, y volvemos a vivir con las palabras en el mejor de los mundos posibles mientras que la luz nos llega a los aparejos. Terminó la ilusión de la autenticidad.

Ciertamente en todogobierno hay cierto grado de convencionalismo y demagogia; es la sal de la política. Pero cuando la política se vuelve salmuera, buscamos no ahogarnos en ella exigiendo el retorno a la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Ofreceré algunos ejemplos que ilustran lo dicho.

Se fijaron los nuevos salarios mínimos, que regirán durante el año 1979, dizque para compensar al asalariado del deterioro de su capacidad adquisitiva debido a la (controlada —¡éjele!—, diría Grados Chapa) inflación; se hizo notar con insistencia que el incremento había sido mayor en los salarios del campo para ayudar al trabajador rural, menos favorecido que el urbano, aunque éste paga mayor alquiler por su vivienda.

El caso es que sólo los empresarios se declararon satisfechos con el nuevo nivel de los salarios, aunque los de la CANACINTRA se

curaran en salud previendo que la elevación salarial repercutirá en los precios —en algunos casos elevándolos hasta el 15 por ciento—, mientras los obreros, mejor dicho sus líderes, calificaron de insuficiente el aumento porque no compensa el alza actual, y menos la previsible, en el costo de las subsistencias.

He aquí cómo los trabajadores "favorecidos" en las palabras oficiales no están conformes con los hechos.

El año de inflación "controlada" se abrió con un aumento de quince por ciento en el precio autorizado de las tortillas de maíz, elemento fundamental de la dieta popular y, para una gran capa de población, alimento casi único, porque muchos millares de familias pobres no alcanzan a comprar más que tortilla y sal, si acaso frijol, que ávidamente se reparten los hijos, y chile verde. Como en los malhadados tiempos de la Dictadura. Pero desde los "ghettos" para millonarios, que son los fraccionamientos residenciales donde viven los "gargantas" de la política, la miseria del pueblo no alcanza a percibirse.

El asunto de las tortillas tiene su historia; la aludí en mi artículo cf. SIEMPRE! N° 1312 (16-VIII-78, pág. 11).

Resulta que cuando don Carlos Sansores Pérez buscaba por todos lados apoyo para su ratificación al frente del PRI, acudió a los representantes de la quinta industria por su importancia en el país que es la de la masa y las tortillas, jefaturada por dos hermanos González que actúan en nombre de la Cámara Nacional de ese ramo y, de improviso, se convierten en voceros de la Alianza (política) de Pequeños Productores.

En su advocación política, los aliancistas de la masa y las tortillas amenazaron entonces con elevar el precio de estas últimas en una proporción que iba del veinte al cuarenta y siete por ciento, sin estudios previos ni otra motivación que el entusiasmo que les produjo el ofrecimiento de don Carlos Sansores Pérez de darles un lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido; pero ya como cámara industrial se desdijeron y se desinflaron y aceptaron justificar su pretensión con estudios serios.

Menos de seis meses después, lo que no les cumplió don Carlos sino les había de cumplir don Raúl (Lozano) al concederles el quince por ciento de incremento en el precio oficial del indispensable producto alimenticio. ¡Esta noticia se publicó al lado del aumento concedido a los salarios mínimos, también de un quince por ciento! Véase cómo hábilmente trenzadas, la economía y la política producen rendimientos a la iniciativa privada.

Otro caso de divorcio entre lo que se dice y lo que se hace se encuentra en la reciente ley que rige el referéndum y la iniciativa popular en el Distrito Federal.

La exposición de motivos y las declaraciones oficiales que en torno de esta iniciativa se hicieron, no encuentran base en la realidad.